

Impunidad|Cero: problemáticas de impunidad y propuestas

(De septiembre 2016 a abril 2017)

Tabla de contenido

Introducción	2
La violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar en México: una aproximación desde el estándar de la debida diligencia	3
Problemáticas	3
Propuestas	4
Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad	6
Problemáticas	6
Propuestas	7
Inseguridad frente al transporte público	10
Problemáticas	10
Propuestas	11
Impunidad frente al homicidio doloso en México	14
Problemáticas	14
Propuestas	15
La accesibilidad como elemento indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad	17
Problemáticas	17
Propuestas	18
Irregularidades en los procesos y autorizaciones de las manifestaciones de construcción	21
Problemáticas	21
Propuestas	22
Salud pública en México ¿Un problema de impunidad?	23
Problemáticas	23
Propuestas	24
Elementos comunes a las investigaciones presentadas	26
Nuestras investigaciones	27

Introducción

En Impunidad Cero estamos preocupados por ofrecer herramientas cada vez mejores para señalar y resolver los casos de impunidad cotidiana que se viven en la República. Creemos que para que esto pueda suceder las problemáticas en primera instancia deben identificarse, y en segunda, debe ofrecerse a los interesados herramientas y vías para dar con la solución adecuada. De aquí que como material complementario a nuestro primer balance *A ocho meses de impunidad cero: problemáticas y propuestas*, artículo publicado en el número de abril de la Revista este País,¹ entreguemos al lector el siguiente anexo.

Mientras que el artículo se centra en mostrar de manera sintética las problemáticas principales que nuestros investigadores han identificado hasta la fecha, este segundo documento hace un recuento ampliado de todas las que han sido mencionadas a propósito de las investigaciones en el transcurso de los ocho meses que Impunidad Cero lleva trabajando. Además, resume también las propuestas para aventurar soluciones posibles que nuestros investigadores señalaron. De modo que la información que ofrecemos aquí proviene de esos trabajos, y puede hallarse por entero al revisarse los originales, disponibles para la consulta del lector en nuestro sitio web: <http://www.impunidadcero.org/>

Esperamos que este material sea un aliciente importante en la lucha cotidiana contra la impunidad en México.

Coordinación de Impunidad|Cero

Abril 2017

La violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar en México: una aproximación desde el estándar de la debida diligenciaⁱⁱ

María Elisa Franco Martín del Campo
Septiembre 2016

Problemáticas

- ✓ De acuerdo con Franco Martín del Campo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) **no contiene normas lo suficientemente claras** con respecto a cuándo la omisión puede generar un daño y un sufrimiento que constituyan este tipo de violencia. Por esta razón, la LGAMVLV no se incluye como un factor a estudiar en esta investigación.
- ✓ **La violencia física se concentra** entre las mujeres más jóvenes, y desciende progresivamente hasta las mujeres de mayor edad (con excepción del grupo de mujeres de 35 a 39 años).ⁱⁱⁱ Esto significa que las mujeres **de 15 a 19 años presentan un riesgo 4 veces mayor de sufrir violencia** física en comparación con las de más de 60 años.
- ✓ En México, **una de cada diez personas justifica poco o mucho la violencia física** contra las mujeres. Esta justificación se da **en mayor medida entre los hombres** que entre las mujeres.^{iv}
- ✓ El **12% de la población opina que la violencia de pareja es un asunto privado**, es decir, que las autoridades no deberían intervenir en los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.^v
- ✓ Según datos de la *Encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública (ENVIPE) 2012*, **60 de cada 100 mujeres víctimas de delito no denunciaron por causas atribuibles a la autoridad**.^{vi} Lo anterior implica claramente que la impunidad de la violencia sufrida por las mujeres se mantiene por causas directamente atribuibles al Estado. Es decir, al **no generar un ambiente de confianza en las instituciones** encargadas de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, se ha mandado el mensaje de que la violencia contra ellas es permitida y tolerada, lo que **ha implicado que la práctica se perpetúe**, específicamente que **no se haya erradicado la violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar**.
- ✓ La LGAMVLV contempla la creación de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia (BANAVIM), cuya integración y actualización correspondía a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública. **Resulta particularmente preocupante que el BANAVIM se encuentre inoperante**, ya que es una herramienta indispensable para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de debida diligencia frente a la violencia contra las mujeres.

- ✓ En un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres, se reveló que menos de la mitad de las medidas analizadas (de un total de 231 productos) para atender con la debida diligencia la violencia contra las mujeres tienen una aplicabilidad alta. Además de **59 modelos analizados para la prevención, atención, sanción y erradicación, sólo cinco responden a los elementos contemplados por el estándar de la debida diligencia.**^{vii} Consideramos que este indicador nos presenta un campo de oportunidad para la adecuada implementación de políticas públicas para atender con la debida diligencia la violencia sufrida por las mujeres.
- ✓ Un elemento de análisis de gran trascendencia es la existencia de recursos públicos destinados a erradicar la violencia contra las mujeres, lo que sin duda es positivo. El problema es el uso, así como el monitoreo y rendición de cuentas de estos recursos: “existen ‘presupuestos etiquetados’ a favor de las mujeres, (...) sin embargo, la Equidad de Género no es una prioridad política en los estados. Muchas veces los recursos son desviados para atender problemáticas consideradas por los gobiernos como de ‘mayor prioridad’.”^{viii} Esto sucede porque **se carece de mecanismos efectivos de monitoreo y rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos, así como de candados sólidos sobre las cláusulas de no transferencia en recursos etiquetados. A su vez se observa que, aun cuando existen dichos presupuestos, éstos no resultan suficientes para impactar en el problema de violencia contra las mujeres.**
- ✓ Para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, la creación de leyes e instituciones representan avances importantes. No obstante, las altas cifras de mujeres que son víctimas de violencia física en el ámbito familiar siguen existiendo.

Propuestas

- ✓ El poder legislativo (tanto federal como local) se encuentra obligado a armonizar todas las leyes de tal manera que no impliquen violencia y/o discriminación en contra de las mujeres, así como a que todas las leyes que sean emitidas cuenten con perspectiva de género. Además el ministerio público (federal y local) se encuentra obligado a investigar con seriedad, imparcialidad, efectividad y con perspectiva de género todos los casos de violencia física en el ámbito familiar contra las mujeres. Por último el poder judicial (tanto federal como local) tiene la obligación de juzgar con perspectiva de género todos los casos de violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar. De aquí se deriva que **los poderes, en los tres órdenes de gobierno, están obligados a implementar políticas públicas con perspectiva de género, a garantizar que los sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no sólo existan formalmente, sino que funcionen adecuadamente y obtengan los resultados para los que fueron creados, así como a garantizar la efectividad de las alertas de género.**
- ✓ Un punto de partida es que la **tipificación** de la violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar **en todas las entidades federativas cumpla con los elementos mínimos establecidos en los estándares internacionales.**

- ✓ Consideramos **esencial la sensibilización y capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres** del personal encargado de atender este tipo de casos, no sólo en agentes del ministerio público, sino también en peritos, y abogados victimales. **Sería óptimo contar con un protocolo de actuación** en casos de violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar.
- ✓ Resulta **esencial la adecuada aplicación de las normas contenidas en el *Protocolo para juzgar con perspectiva de género* de la SCJN (2013)**.
- ✓ Consideramos que **el seguimiento constante y oportuno de las sentencias** que se dictan sobre este tema permitirá conocer la manera como se garantiza el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia en el poder judicial.

Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad^{ix}

Arturo Ramírez Verdugo / María Estela Álvarez / Reyes Ruiz / María José Carreras / Yosef Siman Tov

Octubre 2016

Problemáticas

- ✓ La existencia de impunidad en una sociedad debe considerarse una falla del Estado hacia sus gobernados, toda vez que éste incumple con su obligación de procuración e impartición de justicia. **Esta falta, que debilita o nulifica el estado de derecho, es particularmente notoria y nociva hacia la sociedad cuando se convierte en un hecho cotidiano.** Los mexicanos nos encontramos ya en ese escenario. **Se ha perdido la capacidad de asombro ante los delitos impunes** que vemos en nuestras calles, en los medios de comunicación y en las vivencias de familiares y amigos por medio de las quejas en redes sociales. **El problema más grave que acarrea la impunidad constante, es que corroe lo máspreciado de una nación moderna: sus leyes y la capacidad de las instituciones para hacerlas valer.**
- ✓ La conclusión principal del trabajo es previsible: **los recursos destinados a combatir la impunidad a nivel estatal son insuficientes, dispersos y poco transparentes; adicionalmente existe gran heterogeneidad entre los estados.** El presupuesto para erradicar la impunidad, medido como los recursos dedicados a las labores de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública, es considerablemente bajo respecto a lo que otros países con arreglos institucionales similares han erogado a estos fines, por ejemplo Chile y Colombia.
- ✓ En este estudio se da cuenta de que **la lucha contra la impunidad no es un eje estratégico en los planes estatales de desarrollo.** Por ello parece natural que los recursos destinados no sean suficientes, ya que las leyes presupuestales en general dictan que el gasto público debe destinarse a aquellos programas prioritarios contenidos en los planes y estos últimos varían de acuerdo a la administración que se encuentre gobernando la entidad federativa.
- ✓ **Las mediciones de esta investigación están afectadas por el fenómeno llamado cifra negra,** es decir, los delitos cometidos pero no reportados o no investigados.
- ✓ De acuerdo a cifras del Índice Global de Impunidad (IGI) se observa que en el país el **95% de los delitos quedan impunes**, por lo que México ocupa el lugar 58 de una muestra de 59 países para los cuales se realiza esta medición.^x Lo anterior debería ser inaceptable en una sociedad moderna, por lo que se deberán tomar acciones para modificar esta realidad.
- ✓ Es importante mencionar que en este estudio no se presenta un ejercicio econométrico sólido, sino una medición de correlaciones. Lo anterior derivado de que claramente, **las variables estudiadas no son determinadas independientemente de manera exógena**

una de la otra, por lo que no es posible construir una teoría que sostenga la causalidad entre las mismas de forma inequívoca: en general, los niveles de gasto en estos rubros son una función de los niveles de impunidad, que a su vez se determinan por los primeros. Así pues, el reto de un estudio formal en la materia consiste en encontrar fuentes de cambio exógeno que permitan la medición del impacto en el incremento en los rubros de gasto analizado y los niveles de impunidad observados.

- ✓ En general los Planes Estatales de Desarrollo (PED) incluyen el tema de impunidad como parte del diagnóstico de la situación que atraviesan los distintos estados como una de las amenazas más relevantes que enfrentará la administración. En la mayoría de los casos, **los diagnósticos asocian la impunidad con la falta de participación ciudadana en la denuncia del delito; se expone, como caso generalizado, la pérdida de confianza de la sociedad en las autoridades, principalmente aquellas encargadas de la impartición de justicia, incluyendo las instituciones policiales.** En ese sentido, se asocia la impunidad con falta de profesionalismo y corrupción.
- ✓ Si bien los estados incluyen el combate a la impunidad dentro de sus PED, **en la gran mayoría de los casos ésta se encuentra asociada a un eje u objetivo específico distinto y no como un fin en sí.**
- ✓ Existe una **falta de confianza que se refleja en la creciente cultura de la no-denuncia y ésta última con el incremento en la impunidad.** En este sentido, los objetivos y estrategias que presentan los PED, si bien abordan dimensiones distintas, se encuentran alineados para lograr el fortalecimiento de las instituciones públicas y recobrar la confianza de la sociedad.

Propuestas

- ✓ De las legislaciones estatales revisadas, se pudo apreciar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí **promueve acciones en materia de combate a la corrupción y a la impunidad por sus unidades administrativas y órganos,^{xi} sin embargo no establece objetivos específicos para su realización.**
- ✓ En algunas entidades federativas la ciudadanía tiene injerencia en la observancia del presupuesto asignado a la seguridad pública, **a través de los consejos ciudadanos.**
- ✓ En el caso de Nuevo León, respecto al Instituto Estatal de Seguridad Pública (organismo público descentralizado que tiene por objeto el diseño, actualización, seguimiento y evaluación de la política criminológica y del Programa Estatal de Seguridad Pública), se cuenta con un **Consejo Ciudadano conformado por veinte integrantes y entre sus atribuciones está la de “Observar que el presupuesto asignado a la seguridad pública se aplique adecuadamente, haciendo las recomendaciones conducentes para su correcto destino y uso”.^{xii}**
- ✓ En el caso de San Luis Potosí se menciona que “para mejorar el servicio de seguridad pública, el Centro Estatal y las instancias de coordinación que prevé esta Ley,

promoverán la participación de la comunidad, y tendrán como objetivo actuar sobre las causas que originan la violencia y la delincuencia”.^{xiii}

- ✓ En el *Plan estatal de desarrollo de Michoacán 2012-2015*, se expone la necesidad del gobierno del estado de **consolidar las instituciones para lograr una mejor procuración de justicia y una administración de seguridad eficiente, para de esta manera lograr incentivar la participación ciudadana en materia de denuncia.**^{xiv}
- ✓ En el caso del *Plan estatal de desarrollo del estado de Sonora 2016-2021*, se identifica como reto del gobierno **la consolidación de una fiscalía especializada en hechos de corrupción y se propone como línea de acción: “Armonizar las diversas legislaciones locales correlacionadas a la legislación penal que garanticen la efectiva persecución de hechos de corrupción y reduzcan los índices de impunidad en estos delitos”** (Línea de acción 7.2.4.).^{xv}
- ✓ En el *Plan estatal de desarrollo del estado de Veracruz 2011-2016* [...] se expone la necesidad de “apoyar la reforma al Poder Judicial Veracruzano, para **fortalecer la certidumbre jurídica, elevar la eficiencia, disminuir la impunidad y reducir errores judiciales, así como para profesionalizar a sus elementos”**.”^{xvi}
- ✓ En el *Plan estatal de desarrollo del estado de Aguascalientes 2010-2016* y en el *Plan estatal del estado de Guanajuato 2035*, se incluyen temas que siguen una línea muy distinta. El primero de éstos hace referencia a la impunidad particularmente en temas de género, en este sentido el “Objetivo 2.2.2 constituye **la creación del Centro de Justicia para las Mujeres que responda a las características de este grupo vulnerable.** Dentro de los objetivos de este centro está el garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, de esta manera abatir las cifras negras asociadas a esta clase de delitos y combatir la impunidad.”^{xvii} El segundo, dentro del “Objetivo particular 2.1: **Garantizar la gestión integral de la biodiversidad**”, se propone como línea de acción referente al marco jurídico, **el fortalecimiento de procesos e iniciativas para la prevención y erradicación de la impunidad de los delitos ambientales contra la flora y fauna.**^{xviii}
- ✓ **Los casos más interesantes para el presente análisis los constituyen los estados que exponen la lucha contra la impunidad como misión de gobierno, o que en cierto sentido definen como objetivo prioritario la lucha contra ésta.** El *Plan estatal de desarrollo del estado de Nuevo León 2016-2021* es el más relevante en este sentido, ya que el gobierno establece el **combate contra la impunidad como una de las prioridades fundamentales** del gobierno del estado. Éste mismo señala **la necesidad de construir una nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía, que se base en la certeza de que los actos de corrupción se investigan y son castigados.**^{xix} Otros ejemplos son el *Plan estatal de desarrollo del estado de Hidalgo 2011-2016* y el *Plan estatal de desarrollo del estado de Chihuahua 2010-2016*. El primero de estos incluye como parte de la misión del gobierno, **el compromiso de poner fin a la impunidad**, para ofrecer resultados en materia de competitividad y desarrollo.^{xx} Por su parte el segundo presenta la estrategia integral ¡Chihuahua Vive!; dentro de los **principios** que se exponen

como parte de la misma **se incluyen el combate al abuso de poder, la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad.**^{xxi}

Inseguridad frente al transporte público^{xxii}

Mara Rivera

Noviembre 2016

Problemáticas

- ✓ **El Gobierno de la Ciudad de México otorga permisos y concesiones para el transporte público de pasajeros con pólizas de seguros expedidas por mutualidades que no están reguladas ni reconocidas** por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ni por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Dichas mutualidades **tienen la habilidad de evitar responder a la obligación de reparar los daños ocasionados a** terceros frente a un percance vial, pues no cuentan con un fondo que las respalde ante los incidentes, por lo que se limitan a responder económicamente y librar a los choferes de un problema legal, dejando en desamparo a la otra parte afectada.
- ✓ De esta manera, en aras de cumplir con el artículo 46 del *Nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal*—que establece la presentación de una póliza de seguro vigente como uno de los requisitos para la obtención y permanencia de un permiso para la prestación de transporte público colectivo de pasajeros—,^{xxiii} **la autoridad se convierte en cómplice del problema por no cotejar ni rechazar la petición de un permiso a quien entrega un documento sin validez.**
- ✓ Es importante que **el reglamento de tránsito garantice que los vehículos en la Ciudad de México cuenten con diversas opciones de seguros de responsabilidad civil**, garantizando que la víctima pueda recibir atención médica y traslado a un hospital en caso de accidente.
- ✓ La consultora PwC advierte que **la ambigüedad del reglamento de tránsito de la Ciudad de México abre la posibilidad para que operadores de camiones y microbuses obtengan el permiso necesario, presentando documentos expedidos por mutualidades.** El reglamento **no precisa ni delimita** que sólo se aceptarán pólizas expedidas por seguros comerciales o instituciones reconocidas por la autoridad federal (como la CNSF o la Condusef) para la entrega de un permiso para la prestación del servicio público de pasajeros.^{xxiv}
- ✓ La **falta de vigilancia y regulación de las mutualidades se ha dado en el marco de arbitrariedades, fraudes y atropellos diversos** contra aquellos que han sufrido algún percance en el que una de las partes es el transporte público de pasajeros de una de las principales ciudades del país.
- ✓ **La Condusef advierte que**, debido a que las mutualidades no están reguladas, **no podrá atender las quejas** por incumplimiento de dichas organizaciones.^{xxv}
- ✓ **Las quejas** que recibe la Comisión en contra de dichas organizaciones **son entre cinco o seis veces más** de las que atiende en relación con seguros comerciales.

- ✓ En caso de algún accidente del servicio público concesionado de pasajeros, **los afectados quedan en total indefensión**, mientras que los operadores o dueños de las unidades permanecen sin problema alguno. **Además, las autoridades federales y capitalinas no se adjudican la responsabilidad de este problema**, por lo que las víctimas de un accidente con camiones o microbuses con cobertura de mutualidad **quedan indefensas**, pues **no hay Procuraduría ni Comisión que las atienda**.
- ✓ La contratación de este tipo de pólizas se debe a que **los seguros comerciales son muy caros porque el riesgo de asegurar a los conductores es muy alto** dado que las colisiones y percances son recurrentes.
- ✓ El artículo 46 del *Nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal* no precisa que los operadores no pueden presentar pólizas de seguros expedidas por alguna mutualidad, por lo que en términos reales, los choferes del transporte público de pasajeros no están incumpliendo con la Ley. En cambio, **lo que sí es totalmente irregular e indebido, es que las autoridades acepten como válido ese tipo de documentos**.
- ✓ **27.5% de los mexicanos no contrata seguros por su alto costo.**^{xxvi} Al respecto, la AMIS reconoce que en México las empresas aseguradoras ofrecen pólizas 80% más caras que en otros países, incluido Estados Unidos, **por el mayor nivel de riesgo que existe en el país a causa de diversos factores, como la inseguridad pública**.
- ✓ Es claro que la causa de este problema es **la falta adecuada de revisión de los documentos por parte de las autoridades de la capital**.

Propuestas

- ✓ De acuerdo con la CNSF, **las mutualidades pueden y deben evolucionar, formalizarse y convertirse en mutualistas**¹, cumpliendo con los lineamientos y requisitos necesarios (como demostrar poseer un monto de capitalización e identificación de las personas responsables en caso de un problema) **a fin de que puedan ser reguladas y supervisadas por las instituciones correspondientes, como la Condusef**.
- ✓ En ese sentido, **la CNSF debe avanzar en la identificación de mutualidades para inducirlas a formalizarse como mutualistas** y ofrecer productos financieros con la regulación correspondiente o, de lo contrario, proceder legalmente.
- ✓ **El Gobierno de la Ciudad de México debería retomar el programa de revisión que anunció en marzo de 2012, donde reconoció que existen operadores de camiones y microbuses que contratan a aseguradoras irregulares mutualistas** “que no tienen la capacidad financiera para responder en caso de accidentes graves”.^{xxvii}

¹ La diferencia entre una mutualidad y una Sociedad Mutualista es que la segunda es una institución financiera que requiere de autorización para operar, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sí puede atender la queja ante un incumplimiento hacia algún usuario afectado. Mientras que las mutualidades conforman un fondo de protección para resarcir daños pero operan bajo la informalidad, porque no pueden cumplir con determinados requisitos para constituirse en Sociedades Mutualistas: no cuentan con registros ni permisos para operar, y no están obligadas a identificar a los responsables, en caso de incumplimiento.

- ✓ **En virtud de que las mutualidades no son reguladas, es muy importante que el Gobierno de la Ciudad de México tome dos acciones: primero, informar bien a los usuarios en qué consiste, cómo funciona una mutualidad, para que no se preste a confusión a los transportistas o dueños del transporte público o a las compañías del transporte público; segundo, exigir al transporte público un tipo de seguro más formal, una verdadera cobertura de seguro.**
- ✓ Se destaca **la importancia y trascendencia de los seguros**, toda vez que son catalizadores del ahorro, crecimiento y Estado de derecho, porque hacen más eficiente la intermediación financiera promoviendo prácticas económicas modernas.² Debería impulsarse, además, un mercado flexible en cuanto a la venta de seguros, que se adapte a las necesidades y perfil de cada cliente. La tecnología debe ser un aliado estratégico: no debería pasar desapercibida la oportunidad que representa desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles (como teléfonos inteligentes), que identifiquen el perfil de cada automovilista u operador de camión o microbús (velocidad, prudencia y horarios de manejo, por ejemplo), con el objetivo de ofrecer seguros personalizados y, con ello, abaratar sus costos.
- ✓ Dado que este problema no es exclusivo de la Ciudad de México, pues ocurre en las principales ciudades de la Federación, **podría sentar un precedente si el Gobierno de la capital adoptase las medidas necesarias para corregir esta situación y garantizar que la red de transporte público mejore la calidad en el servicio**, empezando por acatar y volver eficaz y funcional el marco normativo que le es aplicable.
- ✓ Desde el Senado se consideró **urgente que el Gobierno de la Ciudad de México adopte las medidas necesarias** para corregir esta situación, acatando el marco normativo correspondiente para proteger y garantizar la seguridad a usuarios y población en general. De tal manera, **se presentó el 8 de marzo de 2016 un Punto de Acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno a revisar y establecer sanciones a todo el transporte público que opera con cobertura de mutualidades (en lugar de auténticos seguros de cobertura de daños a terceros y responsabilidad civil), por constituir una falta al *Nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal*. Queda esperar que se materialice el Punto de Acuerdo para llamar a cuentas ante el Pleno de la Cámara Alta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a fin de que explique por qué no se han establecido sanciones a todo el transporte público que opera con seguros expedidos por mutualidades, en lugar de seguros contratados con empresas que garanticen la cobertura de daños a terceros. El Punto de Acuerdo presentado exhorta al Gobierno a **rendir un****

² En un estudio de la firma Gnóstica Consultores y De la Calle, Madrazo, Mancera S. C., elaborado para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se destaca la importancia y trascendencia de los seguros. Refiere que los seguros son, ante todo, protección financiera que se brinda a personas físicas o morales frente a riesgos o contingencias específicos. Dicha protección se brinda a través del pago de una prima periódica proporcionalmente menor al costo que debería enfrentar el asegurado ante el riesgo considerado. Rivera, Mara. “Inseguridad frente al transporte público”. *Este País*, núm. 307 (noviembre de 2016), p. 20. También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=16&t=inseguridad-frente-al-transporte-publico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

informe sobre la aplicación de lo mandatado en los artículos 90 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y 46 del *Nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal*. **Es importante dar seguimiento para saber si el Punto de Acuerdo del Senado de la República** es tomado en cuenta o queda en el olvido.

Impunidad frente al homicidio doloso en México^{xxviii}

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez

Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho A.C.

Diciembre 2016

Problemáticas

- ✓ México tuvo un **incremento en los niveles de incidencia de homicidio doloso a partir de 2007 y con ello duplicó la media internacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes**. A nivel mundial, alrededor de 437,000 personas fueron víctimas de homicidio doloso en 2012, lo que equivale a 6 homicidios por cada 100 mil habitantes.^{xxix} En México la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 13.1 en 2014.^{xxx}
- ✓ **Existe opacidad en la generación de información**, ya que **cada vez resulta más difícil acceder a información confiable y oportuna**. Además, hay **una cifra alarmante de desaparecidos** en México, por lo que el número de muertes debidas a causas no naturales podría ser mucho más grande que el registrado en las cifras oficiales, lo que también impactaría a la impunidad en el delito de homicidio. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, **el número de desaparecidos desde 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015 ascendería a 27 mil 659**.^{xxxi} Es decir, parece que el número de homicidios intencionales no registrados en las cifras oficiales (denominada cifra negra) es muy significativa.
- ✓ **El impacto de la incidencia del homicidio doloso** va más allá de la pérdida de vidas humanas, ya que se vuelve una amenaza para la población que **puede generar un entorno de miedo, incertidumbre y vulnerabilidad**.
- ✓ Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la impunidad directa de homicidio doloso en el mundo es alrededor del 57%; en América la impunidad es del 76%, en Asia del 52% y en Europa apenas del 19%. **En México la impunidad en homicidio doloso en 2014 fue de 78.6%, lo que implica que está por arriba de la media en el continente americano**, y aún muy lejos de cifras como las que se observan en Asia y Europa; **incluso en las entidades del país con menores niveles de impunidad en homicidio, las cifras sobrepasan por mucho los datos de países desarrollados**.^{xxxii}
- ✓ **La impunidad en homicidio doloso (intencional) en México a nivel nacional para el año 2014 fue de 78.6%, es decir, de cada 5 homicidios en el país solo 1 se sancionó. En casi 20 años el país no ha logrado mejorar las cifras de impunidad**, ya que los datos de 1997 y 2014 son muy similares: 78.2% y 78.6%, respectivamente.^{xxxiii}
- ✓ Considerando la impunidad promedio de 2010 a 2014, **México se ubica como el octavo país con mayor impunidad** de cincuenta y un países para los que se pudo calcular el dato.^{xxxiv}
- ✓ A pesar de que entre 2006 y 2012 se duplicó el número de homicidios, la capacidad instalada para el esclarecimiento y sanción del homicidio en el sistema de justicia penal

del país se ha mantenido estable, en alrededor de 4,300 casos resueltos y concluidos con una sentencia condenatoria. Es decir, **independientemente de si en el país se registraron 10,253 homicidios (2007) o 22,852 (2011), el número de condenas por homicidio doloso se mantuvo en un rango entre 4,357 (2012) y 4,803 (2005).**^{xxxv}

- ✓ **Los resultados del Sistema de Justicia Penal parecen no estar relacionados con la “demanda” social de servicios de procuración de justicia y reducción de la violencia.** Sólo uno de cada tres homicidios se esclarece por parte del Ministerio Público y, en esos casos, 69% de los imputados son puestos a disposición del juez.
- ✓ Si sólo consideráramos en nuestro análisis la sentencia de las personas a las que se les imputa el delito de homicidio intencional tendríamos que **la probabilidad en México de que una persona cometa un homicidio y su caso llegue a sentencia es de 20.5%.** De las sentencias en casos de homicidio intencional en México, 88.4% son en sentido condenatorio en tanto que 11.6% son absoluciones. De esta forma **la probabilidad promedio en México de que una persona cometa un homicidio y llegue a ser condenado es de 18.1%.**^{xxxvi}
- ✓ Pareciera que **la capacidad instalada de investigación está topada y no puede dar mejor rendimiento.** A pesar del aumento de la violencia en la mayoría de las entidades, **la capacidad de investigación del ministerio público y de llegar a sancionar a los responsables disminuyó** en más de la mitad de las entidades durante el periodo de pico de violencia.^{xxxvii}
- ✓ En algunas entidades el **sistema de justicia está colapsado.** Es el caso de: Chiapas, Durango, Chihuahua, Michoacán, Coahuila, Sonora, Veracruz, Yucatán y Tamaulipas.^{xxxviii}
- ✓ **Sólo en cuatro [de 32] entidades federativas se registra una tendencia consistente de incremento de las sanciones: Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo y Guanajuato.**^{xxxix}

Propuestas

- ✓ Naciones Unidas y otros organismos públicos y privados del mundo han analizado y demostrado **la relación entre la violencia y el desarrollo social y económico.** Por estas razones **los gobiernos deben llevar un registro del número de homicidios que ocurren, en qué lugar ocurren, cómo ocurren y quiénes son las víctimas de estos delitos.**
- ✓ Además de **monitorear la incidencia de homicidios, resulta indispensable analizar la capacidad de los sistemas de justicia para enjuiciar a los responsables,** toda vez que es una responsabilidad del Estado.
- ✓ Los homicidios relacionados con actividades de grupos criminales requieren una estrategia de investigación más compleja que la empleada para los homicidios intencionales comunes en los que el autor material e intelectual y los móviles pueden esclarecerse con mayor facilidad. **Urge un nuevo modelo de gestión y organización de las investigaciones criminales.**

- ✓ Las sociedades que han logrado revertir la espiral de violencia e impunidad han optado por **fortalecer la tríada de la investigación: Ministerio Público-Policía investigadora-Peritos, mediante tres acciones:**
 - **Modelo de gestión y desarrollo organizacional**
 - **Protocolo y estrategia de investigación**
 - **Desarrollo de competencias en ministerios públicos, policías y peritos**
- ✓ En cuanto al modelo de gestión, existe consenso sobre la **creación y desarrollo de unidades especializadas en investigación y persecución de delitos**. Su especialización se da generalmente por tipo de delito, o bien por funciones. Este modelo termina con la lógica de investigar a través de oficios (solicitar actos de investigación y diligencias por oficios a los titulares de las diversas áreas).
- ✓ También se han emprendido **unidades mixtas que involucran a autoridades de diversos niveles de gobierno, así como al sector de inteligencia, en asuntos relacionados con el crimen organizado**. El equipo de trabajo debe tener frecuentes sesiones de las que se lleven minutas. Estas reuniones serán la instancia de revisión de avances, intercambio de información, ajustes de líneas de investigación, entre otras actividades.
- ✓ Se debe establecer también **estabilidad laboral y servicio civil de carrera** para estos servidores públicos **a fin de garantizarles una situación profesional adecuada**, en virtud de que será personal altamente calificado y especializado al que debe retenérsele en el sector público a través de mejores condiciones de trabajo. **Se debe fomentar la relación cercana y estrecha entre ambos actores (Ministerio Público y Policía) y crear equipos de trabajo en conjunto.**
- ✓ **El personal deberá estar especializado y tener las competencias y certificaciones propias de su actividad**, así como la especialización en las materias y procesos de la unidad. Además, las unidades deberían ir acumulando el aprendizaje organizacional, evaluando qué diligencias tienen mayor impacto en la acusación y posterior condena de la persona imputada.
- ✓ Las anteriores prácticas deberían documentarse y replicarse en el país para reducir la impunidad, **recuperar la tranquilidad ciudadana y la legitimidad del Estado como garante del orden y la integridad física y patrimonial de las personas.**

La accesibilidad como elemento indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad^{xl}

Mariana Díaz Figueroa

Enero 2017

Problemáticas

- ✓ **Todos somos personas con discapacidad en potencia**, debido al simple paso del tiempo o como resultado de algún accidente, es decir, todos podemos llegar a enfrentar una discapacidad en algún momento.
- ✓ **Las personas con discapacidad son objeto de grandes desigualdades** en todo el mundo **y tienen más probabilidades de experimentar pobreza y otras formas de exclusión social.**^{xli}
- ✓ **La población con discapacidad se encuentra en aumento**, ya que quienes envejecen tienen un mayor riesgo de enfrentarla en algún momento de su vida.^{xlii} Nuestra cotidianidad y la manera automática en que realizamos diversas actividades nos impiden detenernos a pensar que **no todas las personas cuentan con las mismas posibilidades y que, por lo tanto, las acciones que realizamos—incluso de manera instintiva—, para otros pueden representar todo un reto.**
- ✓ **El ambiente físico tiene una importancia crucial en términos de inclusión/exclusión social.** Es decir, “la relación persona–ambiente juega un papel fundamental para el desarrollo del ser humano y la posibilidad de llevar a cabo sus aspiraciones más profundas”.^{xliii}
- ✓ En México hay cerca de 120 millones de personas. De ellos, **casi 7.1 millones tienen algún tipo de discapacidad,**^{xliv} lo que representa el **6% de la población del país. El derecho a acceder al ambiente físico se encuentra relacionado con el derecho a la libertad en todas sus expresiones. En el caso de las personas con discapacidad,** adquiere una importancia y significado mayor que en las personas sin discapacidad, debido a que **es un prerrequisito para poder ejercer otros derechos.**
- ✓ Cuando se habla de accesibilidad urbanística **generalmente se piensa en soluciones para personas con discapacidad motriz, sin contemplar que existen otros tipos de discapacidades que requieren que sus necesidades también sean tomadas en cuenta** (como es el caso de la discapacidad visual, en la que se necesitan señalizaciones en sistema braille o semáforos sonoros, por ejemplo).
- ✓ En México, **la mayoría de las construcciones resultan de alguna u otra manera inaccesibles. La falta de accesibilidad genera discriminación,** al negar u obstaculizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, lo que da como resultado la vulneración.

- ✓ El término **diseño universal** es definido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPCD) como la **creación de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado**, aclarando que lo anterior no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.^{xlv} A partir de un análisis de planes de estudio de carreras como arquitectura y diseño industrial, es posible advertir que los mismos no contemplan una materia sobre el tema de la accesibilidad, **incorporando conceptos relacionados con el diseño universal y los ajustes razonables**.
- ✓ Las **obligaciones adquiridas por el Estado mexicano** por la firma de compromisos internacionales, **se incumplen día con día al no contar con una planeación urbana adecuada que garantice la accesibilidad universal y la movilidad de las personas con discapacidad**.
- ✓ Aunque existen algunos programas que abordan el tema de la accesibilidad —como el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal—, **lo cierto es que la instrumentación y coordinación de los mismos no es clara**.
- ✓ Para los fines de esta investigación, **no se encontró algún diagnóstico completo y actualizado de la situación de la accesibilidad**, por lo menos de los edificios públicos en México.
- ✓ Si no se cuenta con diagnósticos adecuados, completos y actualizados de la situación de accesibilidad de los inmuebles, **será muy complicado formular, implementar y darle seguimiento efectivo a las políticas públicas necesarias para resolver el problema**.
- ✓ Laura Bermejo, directora general de Libre Acceso (y experta en el tema), mencionó que **gran parte de la problemática radica en la falta de sanciones** frente al incumplimiento de la obligación de hacer entornos accesibles.^{xlvi}
- ✓ No existe **órgano especializado para la verificación del cumplimiento de la obligación de contar con espacios tanto públicos como privados accesibles y, mucho menos, sistemas de quejas al respecto**, lo que fue confirmado por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).^{xlvii}
- ✓ Aunque existen mecanismos de quejas por discriminación (debido a la falta de accesibilidad) que se pueden promover ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); **siguen sin resultar del todo eficaces al emitir únicamente recomendaciones que no tienen carácter coercitivo**.

Propuestas

- ✓ “El **cambio de paradigma urbano** hacia ciudades conectadas, compactas, inclusivas e incluyentes, contribuye al acceso a derechos y oportunidades. Por esto, **el diseño y**

planificación de las ciudades debe considerar la accesibilidad universal, permitiendo que todas las personas puedan desplazarse libremente en las ciudades y tengan igualdad en el acceso de oportunidades”^{xlvi}

- ✓ **Es obligación del gobierno realizar diagnósticos de accesibilidad del entorno** para que, identificado el problema, se pueda establecer **un programa de modificación progresiva** y sobre todo **contar con estrategias definidas que apliquen el diseño universal^{xlvi} y los ajustes razonables³** en las modificaciones del entorno urbanístico.
- ✓ Resultaría sumamente importante que la autoridad responsable, en este caso las delegaciones, **verifiquen que la obligación de no discriminar se cumple no solamente de manera formal sino de manera real, dando seguimiento a los permisos otorgados.**
- ✓ Se considera necesario que **la Federación genere líneas de acción concretas en la materia, que además sean homogéneas para todos los estados.**
- ✓ **La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tiene la obligación de establecer los programas y mecanismos necesarios** para que en el ámbito del desarrollo urbano se asegure el pleno ejercicio de los derechos de las personas con **discapacidad.**
- ✓ **La utilización del “Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal para el Periodo 2014-2018”,** coordinado por el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI), mismo que “buscará cerrar brechas de desigualdad, fortaleciendo la integración al desarrollo de las personas con discapacidad, con políticas públicas que faciliten el ejercicio pleno de sus derechos”. En el mismo se establece que **la planeación será participativa y que uno de los ejes transversales es la accesibilidad.¹**
- ✓ **Asimismo, para que las normas de accesibilidad se cumplan a cabalidad, debería existir un órgano regulado, experto en la materia, con atribución de sancionar administrativamente.**
- ✓ Es indispensable **preparar a las futuras generaciones de profesionistas para entender la problemática del tema,** y dotarlos de conocimientos tanto teóricos como técnicos sobre accesibilidad, para poder influir adecuadamente en el diseño de los nuevos entornos, pues es **desde las aulas que los alumnos deben aprender a construir ciudades sin barreras.**
- ✓ Es fundamental la **participación de las personas con discapacidad** para hacer visible la falta de accesibilidad y solicitar las modificaciones necesarias.
- ✓ Del mismo modo, resulta indispensable que la **sociedad civil tome conciencia** de la importancia que representa para las personas con discapacidad el poder contar con

³ Se trata de aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que las demás. Organización de las Naciones Unidas. “Artículo 2. Definiciones”. *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Recuperado de: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> (Consultado el 10 noviembre de 2016).

entornos accesibles y defienda que los ajustes no son privilegios sino herramientas indispensables que les permiten el ejercicio de sus derechos.

- ✓ **El trabajo colaborativo en este tipo de temáticas permite identificar con mayor facilidad la problemática y la posibilidad de prever algunas alternativas.** Al respecto, vale la pena mencionar la existencia de la aplicación para celular *EsAccesible*,^{li} creada por el programador Juan José Bilbao Junquera, de descarga gratuita, que permite a sus usuarios, mediante ubicación GPS, calificar la accesibilidad de los lugares que visitan y compartirla con otros usuarios.

Irregularidades en los procesos y autorizaciones de las manifestaciones de construcción^{lii}

Patricia López Moreno
Febrero 2017

Problemáticas

- ✓ La Ciudad de México se ha visto afectada por la **falta de previsión, el desconocimiento de las normas de construcción y urbanismo existentes, y la ignorancia de los planes de crecimiento que fueron elaborados con anterioridad y no fueron acatados**. Cuando hubo un crecimiento poblacional explosivo, durante la década de 1970, se realizaron construcciones que tienen por consecuencia actual la ausencia de servicios, la falta de movilidad y un deterioro en la calidad de vida para las personas que habitan, laboran y transitan diariamente por la capital del país.
- ✓ **En la Ciudad de México, las denuncias por irregularidades en las construcciones se han incrementado considerablemente en los últimos diez años**. En la mayoría de las ocasiones estas **denuncias no prosperan**.
- ✓ El problema es que **existe corrupción, impunidad, conflictos de interés, discrecionalidad y competencia desleal en los procesos de construcción, lo que culmina en anomalías**.
- ✓ **Las construcciones en la Ciudad de México no tendrían problema alguno en cuanto a su proceso refiere si se cumpliera a cabalidad con el *Reglamento de construcciones para el Distrito Federal*, de acuerdo con el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF), Renato Berrón Ruiz.^{liiii} De esta forma, las irregularidades en los procesos de las manifestaciones de construcción derivan directamente del incumplimiento de las normas y leyes ya dispuestas. Además, para Berrón Ruiz, **en el proceso en que se autorizan las manifestaciones de construcción existen anomalías por conflictos de interés y por una competencia desleal, lo que repercute directamente en la seguridad de las edificaciones y en la calidad de vida de quienes habitan el inmueble y sus alrededores.**^{liv}**
- ✓ Un ejemplo de lo anterior son los **asentamientos irregulares, en que la población percibe las anomalías, pero nadie procede legalmente**. Este tipo de construcciones no son denunciadas, **y terminan por regularizarse con todo y entrega de escrituras**. En estos casos prevalecen los intereses políticos.
- ✓ De acuerdo con el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Miguel Ángel Cancino Aguilar, **los instrumentos de planeación en la Ciudad de México son muy malos y no corresponden a la realidad. Además, no cuentan con la participación ciudadana y no son abiertos ni transparentes**, lo que aumenta el margen de discrecionalidad de las distintas instancias gubernamentales que entran en juego, y permite que utilicen criterios distintos para casos similares.^{lv}

Propuestas

- ✓ Es indispensable que las obras se realicen de acuerdo a un **nuevo *Programa general de desarrollo urbano*, actualizado, transparente y participativo**, en el que se consideren las voces de expertos, autoridades, constructores, vecinos y demás actores involucrados.
- ✓ Es imprescindible que se **conjunten leyes y voluntad ciudadana** para contar con un *Programa general de desarrollo urbano* que garantice un crecimiento ordenado.
- ✓ Renato Berrón Ruiz, Francisco Javier Solares Alemán, Héctor Ferreiro León y Miguel Ángel Cancino,^{lvi} además de constructores, vecinos y otras instancias de gobierno, como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, coincidieron en la necesidad de **crecer con orden y de forma sustentable en lo que se refiere a urbanidad**.
- ✓ Lo primero que se tendría que **hacer es un estudio de mecánica de suelo y con ello determinar el techo de las construcciones y la redensificación de algunas zonas**, así como las factibilidades, bien especificadas, porque actualmente no existen y es aquí donde entra la discrecionalidad.
- ✓ Gene Towle, director de Softec, señaló que **el mercado de vivienda en la Ciudad de México podría reducirse a 400 mil viviendas anuales, si se lograra un ordenamiento de las entidades federativas y se otorgara certidumbre en el uso de suelo, con trámites menos discrecionales**.^{lvii}
- ✓ Es necesario realizar una **transición de modelo, sin detener la infraestructura en beneficio de todos, pero construyendo sin corrupción e impunidad**.
- ✓ Además **se requiere transparencia**, pues a pesar de que se invita a que los vecinos participen en la elaboración del *Programa general de desarrollo urbano*, su involucramiento no es vinculante. **Esto posibilita que las autoridades digan que se escuchó la voz de los habitantes, y al mismo tiempo no tomen en cuenta la opinión de los mismos**.

Salud pública en México ¿Un problema de impunidad?^{lviii}

Laura García Velasco (con la colaboración de Alejandra Georgina Laorabaquio Saad).
Marzo 2017

Problemáticas

- ✓ En la tarea de preservar la salud integral de las personas juegan un papel trascendental los servicios de salud y, en específico, la actividad de los profesionales del rubro. Sin embargo, en el desarrollo de la labor cotidiana de las instituciones del sector salud, **se observa que los profesionales pueden quebrantar las normas establecidas.**
- ✓ La información deja entrever que **existe un número bajo de quejas** ante el organismo especializado en conocerlas, **que no se corresponde con la percepción sobre la oportunidad, calidad y resultados de los servicios.**^{lix}
- ✓ **Todos los medios legales de solución son de índole jurisdiccional.** Esto implica **mayores recursos materiales y personales** por parte de los usuarios afectados, y tiene por consecuencia, en muchas ocasiones, que **los mismos opten por no presentar denuncia o demanda alguna, lo que deriva directamente en impunidad.**
- ✓ Vale precisar que **no fue tarea sencilla obtener datos duros** que evidenciaran la situación real, ya que la plataforma de acceso a la **información pública no funcionó durante varios meses**, a partir de mayo del 2016. **Hasta marzo del 2017 persistían las intermitencias en el sistema.** Esto hizo imposible formular solicitudes de acceso a la información en los portales propios de las instituciones de salud —como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)—, pues la plataforma de acceso a la información es nacional.
- ✓ La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) es un mecanismo nacional para que los usuarios obtengan respuesta a sus inquietudes y el problema no escale, por lo que **los bajos números de quejas médicas del sector salud podrían indicar la falta de una cultura de denuncia por una parte; y por otra, el desconocimiento, o bien, la desconfianza en esa vía de solución.**
- ✓ La **condición socioeconómica del usuario no debe ser considerada un detalle menor para medir la respuesta efectiva de las autoridades ante la mala práctica de los profesionales e instituciones de salud.** La propia CONAMED reconoce que **no cuenta con estos datos al respecto de quienes acuden ante ella.**^{lx} Llama la atención, por ejemplo, que un gran número de los casos documentados en los que los conflictos se resolvieron a través del arbitraje médico, ocurrieron en los servicios prestados por el sector privado. **Esto podría indicar que la baja reclamación respecto de los servicios públicos de salud obedece más bien a la situación socioeconómica de quienes son afectados.**
- ✓ Si bien se genera información relativa a las quejas médicas por parte de diversos órganos, la misma no se cruza de manera que pudiera conocerse a nivel nacional un

resultado final sobre las irregularidades en materia del servicio público de salud, y respecto de si se les ha dado solución o no.

- ✓ A 20 años de su creación, el órgano especializado para contener y solucionar los conflictos paciente-médico (**CONAMED**), **tiene un nivel bajo de eficacia** frente a lo que se esperaría de él, dado **su impacto mínimo en la solución de conflictos** derivados de los servicios de salud: en el periodo de 2012 a 2015, por ejemplo, **el número de quejas ante la CONAMED no disminuyó de forma considerable.**^{lxi}
- ✓ Si bien el IMSS cuenta con mecanismos internos a través de los cuales puede dar solución a las inconformidades de los usuarios, deja dudas el hecho de que, siendo el organismo de seguridad social que mayor población atiende, **a lo largo de un lustro haya recibido sólo 24 mil 526 quejas.** También resulta llamativo el hecho de que únicamente en 68 casos se determine que hubo negligencia médica.
- ✓ Se advierte que el número de quejas médicas y de casos en los que se determinó que **existió error o negligencia** —según los datos proporcionados por las instituciones de salud—^{lxii} **no es proporcional a la población usuaria, ni a la percepción que la misma tiene del servicio.** Esto deriva del contraste entre los datos proporcionados por las instituciones de salud y los datos de la *Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2015.*^{lxiii}
- ✓ Las quejas médicas continúan año con año, y se han presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto indica una falta en el Estado para corregir la mala actuación de los prestadores del servicio, y agrava la impunidad ante la situación.

Propuestas

- ✓ Una **opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte de la sociedad** son de importancia capital para el mejoramiento de los servicios de salud. Es imprescindible que **la sociedad tenga información clara y veraz acerca de sus derechos en materia de salud: en qué consiste la mala práctica médica, cuándo procede indemnización, y cuáles son las instancias o procedimientos para reclamar.** Es importante también que **reciba orientación y contención en las propias instituciones de salud, a fin de que muchas de las situaciones que se presentan, y que no constituyen mala práctica, encuentren respuesta inmediata y no escalen a otras instancias.**
- ✓ La faceta social o pública del derecho a la salud exige del Estado **atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, y establecer mecanismos para que todas las personas tengan acceso a tales servicios.** Por lo anterior, resulta imprescindible por ejemplo, **actuar a través del diseño de políticas públicas y controles de calidad del servicio.**^{lxiv} Estas últimas deben implementarse en condiciones de igualdad y con la calidad debida.
- ✓ Dado que es mejor detener un problema cuando inicia —y mejor aún, prevenirlo—, debería apostarse mayormente a la **eficacia de los mecanismos existentes dentro de las propias instituciones públicas de salud, o bien, a la CONAMED como órgano**

especializado, para solucionar conflictos derivados de la prestación del servicio. Esto, además, beneficiaría al sector salud, pues permitiría conocer en qué rubros existen mayores deficiencias, así como implementar políticas mejor pensadas para corregirlas.

- ✓ **El legislador siempre tendrá responsabilidad en la protección que se brinda a un derecho fundamental como es la salud, en tanto le corresponde prever las medidas legislativas necesarias para ello.** Una de sus tareas es, entonces, **fortalecer el órgano encargado del arbitraje médico, la CONAMED, a fin de que ésta tenga mayor autonomía y atribuciones, así como recursos materiales y humanos suficientes para llevar a cabo su función.** De igual manera, el legislador federal podría establecer la obligación de que en las unidades médicas y hospitalarias exista un área de atención a los pacientes, con personal capacitado en orientación y contención. Esto es imprescindible dado que **gran parte de los conflictos que surgen deriva de la mala o nula comunicación entre usuarios e instituciones de salud y personal médico.**
- ✓ Es necesario establecer la obligación de las instituciones de salud de llevar **un registro de quejas e inconformidades**, en el que se anote el sexo y edad de los quejosos, su condición socioeconómica, el motivo del reclamo, el área de atención de la que deriva el problema, así como la orientación brindada. De obtenerse, **esta información debería ser publicada periódicamente a fin de que sirva al propósito de mejorar la calidad del servicio.**
- ✓ Sería conveniente que la Secretaría de Salud —como coordinadora del sistema de salud—, dicte las **normas oficiales mexicanas para homologar un modelo de atención médica para el sector público**, que comprenda instancias internas de contención y solución, a través de procedimientos accesibles y sencillos, con el propósito de que, dado el caso, canalicen a los afectados ante la CONAMED y sus símiles en los estados.
- ✓ La **Secretaría de la Función Pública** representada en cada entidad de salud pública (en sus órganos internos de control), **también tendría que coadyuvar de manera más efectiva en el control**, a través de la generación de **datos** que reflejen la situación imperante, la implementación de **mecanismos** accesibles para denunciar irregularidades por parte de los servidores públicos de salud, y la **difusión** permanente de los mismos.
- ✓ La preservación de la salud no sólo depende de la pericia médica. **Para la prestación de un servicio público de salud de mejor calidad es fundamental incentivar una cultura de la denuncia.**

Elementos comunes a las investigaciones presentadas

- ✓ Hay una **falta de datos confiables y oportunos respecto a las problemáticas de impunidad** señaladas en nuestras investigaciones que nos impiden tener una idea completa y precisa respecto a la situación actual de las temáticas (homicidio, salud, accesibilidad, discriminación).
- ✓ Sin datos respecto a las problemáticas **se dificulta la tarea de crear, actualizar e implementar políticas públicas y legislación eficientes que intenten revertir las situaciones de impunidad.**
- ✓ Es indispensable **fomentar una cultura de la denuncia.** Se requiere de la **participación ciudadana** para erradicar la impunidad.
- ✓ Se debe **fortalecer la confianza en las instituciones.**
- ✓ En algunos casos **se debe dotar de autonomía y mayores recursos a las instituciones existentes que se dedican a la solución de conflictos.** En otros casos se deben crear organismos que den seguimiento al cumplimiento de la legislación existente.
- ✓ Se requiere de la **coordinación de los tres poderes en los órdenes de gobierno** para erradicar la impunidad.

Nuestras investigaciones

Díaz Figueroa, Mariana. “La accesibilidad como elemento indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”. *Este País*, núm. 309 (enero de 2017), pp. 21-29. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=21&t=la-accesibilidad-como-elemento-indispensable-para-el-ejercicio-efectivo-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

Franco Martín del Campo, María Elisa. “La violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar en México: una aproximación desde el estándar de la debida diligencia”. *Este País*, núm. 305 (septiembre de 2016), pp. 7-16. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=4&t=violencia-contra-las-mujeres> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

García Velazco, Laura y Laorrabaquio Saad, Alejandra Georgina. “Salud pública en México ¿Un problema de impunidad?”. *Este País*, núm. 311 (marzo de 2017), pp. 22-32. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=27&t=salud-publica-en-mexico> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

López Moreno, Patricia. “Irregularidades en los procesos y autorizaciones de las manifestaciones de construcción”. *Este País*, núm. 310 (febrero de 2017), pp. 16-24. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=23&t=irregularidades-en-los-procesos-y-autorizaciones-de-las-manifestaciones-de-construccion> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

Ramírez Verdugo, A., Álvarez, M.E., Reyes Ruiz, Carreras, M.J. y Siman Tov, Y. “Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad”. *Este País*, núm. 306 (octubre 2016), pp. 19-29. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=15&t=estudio-sobre-disponibilidad-presupuestal-para-el-combate-a-la-impunidad> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

Rivera, Mara. “Inseguridad frente al transporte público”. *Este País*, núm. 307 (noviembre de 2016), pp. 14-20. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=16&t=inseguridad-frente-al-transporte-publico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”. *Este País*, núm. 308 (diciembre 2016), pp. 13-22.

También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017)

ⁱ Amat, Carmen, Mancini, Luna y Tello Arista, Irene, “A ocho meses de Impunidad Cero: Problemáticas y propuestas”. *Este País*, núm. 312 (abril de 2017), pp. 18-26.

ⁱⁱ Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de Franco Martín del Campo, María Elisa. “La violencia física contra las mujeres en el ámbito familiar en México: una aproximación desde el estándar de la debida diligencia”. *Este País*, núm. 305 (septiembre de 2016), pp. 7-16. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=4&t=violencia-contra-las-mujeres> (Consultado el 21 de marzo del 2017).

ⁱⁱⁱ Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (2011) *Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2011*.

^{iv} INEGI. (2010). *Encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS) 2011*.

^v INEGI. (2010). *Encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS) 2011*.

^{vi} INEGI. (2012). *Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2012*. Recuperado de: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2012/> (Consultado el 18 de marzo del 2017).

^{vii} Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). (2009). “Evaluación de las medidas aplicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, Cuaderno de trabajo 9. México: Autor.

^{viii} INMUJERES. (2010). “Estrategias implementadas por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, Cuaderno de trabajo 18, p. 4. México: Autor.

^{ix} Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de Ramírez Verdugo, A., Álvarez, M.E., Reyes Ruiz, Carreras, M.J. y Siman Tov, Y. “Estudio sobre la disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad”. *Este País*, núm. 306 (octubre 2016), pp. 19-29. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=15&t=estudio-sobre-disponibilidad-presupuestal-para-el-combate-a-la-impunidad> (Consultado el 21 de marzo del 2017).

^x LeClercq, Juan Antonio y Rodríguez, Gerardo (coord.). (2016). *Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX 2016)*. México: Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ)/ Universidad de las Américas Puebla (UDLA). Recuperado de: http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf (Consultado el 17 de marzo del 2017).

^{xi} Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Recuperado de: <http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes> (Consultado el 21 de marzo del 2017).

^{xii} Ley de Seguridad Pública (Nuevo León). Artículo 107, fracción IV.

^{xiii} Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Artículo 143.

^{xiv} Gobierno del Estado de Michoacán. *Plan estatal de desarrollo 2012-2015*. Recuperado de:

http://dsc.itmorelia.edu.mx/pDSC/images/Documentos/Planes/PLADIEM_2012-2015.pdf (Consultado el 18 de marzo del 2017).

^{xv} Gobierno del Estado de Sonora. *Plan estatal de desarrollo 2016-2021*. Recuperado de:

<http://www.sonora.gob.mx/gobierno/sonora-trabaja.html> (Consultado el 18 de marzo del 2017).

^{xvi} Gobierno del Estado de Veracruz. *Plan estatal de desarrollo 2011-2016*. Recuperado de: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo86957.pdf> (Consultado el 21 de marzo del 2017).

- ^{xvii} Gobierno del Estado de Aguascalientes. *Plan sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016*. Recuperado de: http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/Docs/PLAN_SEXENAL_de_Gobierno_2010-2016.pdf (Consultado el 21 de marzo del 2017).
- ^{xviii} Gobierno del Estado de Guanajuato. *Plan estatal de desarrollo 2035*. Recuperado de: https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf (Consultado el 21 de marzo del 2017).
- ^{xix} Gobierno del Estado de Nuevo León. *Plan estatal de desarrollo del estado de Nuevo León 2016-2021*. Recuperado de: <http://www.nl.gob.mx/publicaciones/plan-estatal-de-desarrollo-2016-2021> (Consultado el 21 de marzo del 2016).
- ^{xx} Gobierno del Estado de Hidalgo. *Plan estatal de desarrollo 2011-2016*. Recuperado de: <http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/PED/home.html> (Consultado el 21 de marzo del 2017).
- ^{xxi} Gobierno del Estado de Chihuahua. *Plan estatal de desarrollo 2010-2016*. Recuperado de: <http://www.chihuahua.gob.mx/Institucional/Plan-estatal-de-desarrollo-2010-2016> (Consultado el 21 de marzo del 2017).
- ^{xxii} Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de Rivera, Mara. “Inseguridad frente al transporte público”. *Este País*, núm. 307 (noviembre de 2016), pp. 14-20. También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=16&t=inseguridad-frente-al-transporte-publico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).
- ^{xxiii} *Nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal* (17 de agosto 2015). Recuperado de: <http://www.ssp.df.gob.mx/reglamentodetransito/> (Consultado el 19 de septiembre de 2016).
- ^{xxiv} Aburto, Rodrigo. *Entrevista con el Director de Seguros del sector financiero de PwC*, realizada por Mara Rivera (octubre de 2016).
- ^{xxv} Rivera, Mara. “Inseguridad frente al transporte público” (noviembre de 2016), p. 6. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=16&t=inseguridad-frente-al-transporte-publico> (Consultado el 21 de marzo del 2017).
- ^{xxvi} Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2015). *Encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF) 2015*. Recuperado de: <http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf> (Consultado el 19 de septiembre de 2016).
- ^{xxvii} Mora, Karla (2012, Marzo 13). *A revisión, seguros de transporte* (párr. 2). Recuperado de: <http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/110644.html> (Consultado el 20 de marzo del 2017).
- ^{xxviii} Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”. *Este País*, núm. 308 (diciembre 2016), pp. 13-22. También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).
- ^{xxix} Cifras con base en datos de 219 países y territorios. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC, por sus siglas en inglés]. (2013). *Estudio mundial sobre el homicidio. Tendencias/ Contextos/ Datos. Resumen ejecutivo*. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_spanish.pdf (Consultado el 17 de marzo del 2017).
- ^{xxx} Considerando el dato de carpetas de investigación y averiguaciones previas por este delito en las procuradurías o fiscalías estatales. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP]. Datos concentrados por el SESNSP. *Datos abiertos de incidencia delictiva*; Recuperado de: <http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php> (Consultado el 19 de marzo del 2017); Consejo Nacional de Población, CONAPO, *Proyecciones de población*. México: Autor. Recuperado de: <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones> (Consultado el 20 de marzo del 2017).
- ^{xxxi} Vicenteño, David (2016, febrero 11) “Hay 27 mil 659 desaparecidos; reporte oficial del Gobierno”. *Excelsior*. Recuperado de: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/11/1074404> (Consultado en octubre de 2016).

^{xxii} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 5. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxiii} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 9. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxiv} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 5. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxv} SESNSP. *Datos abiertos de incidencia delictiva local*, para los datos de incidencia. Para los datos de sentencias condenatorias: INEGI (s.f.) *Estadísticas judiciales en materia penal (1997-2012)*. México: Autor. Recuperado de:

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/registros/sociales/judicialespenal/> (Consultado el 20 de marzo del 2017); INEGI (2013) *Censo nacional de impartición de justicia estatal*. Recuperado de: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnije2013/> (Consultado el 20 de marzo del 2017); e INEGI (2014). *Censo nacional de impartición de justicia estatal*. México: Autor. Recuperado de: <http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cnije/2014/> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

^{xxvi} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, pp. 12-13. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxvii} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 17. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxviii} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 19. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xxix} Zepeda Lecuona, Guillermo Raúl y Jiménez Rodríguez, Paola Guadalupe. “Impunidad frente al homicidio doloso en México”, p. 29. Recuperado de: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-mexico> (Consultado el 19 de marzo del 2017).

^{xl} Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de Díaz Figueroa, Mariana. “La accesibilidad como elemento indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”. *Este País*, núm. 309 (enero de 2017), pp. 21-29. También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=21&t=la-accesibilidad-como-elemento-indispensable-para-el-ejercicio-efectivo-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

^{xli} Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). *Informe Mundial sobre discapacidad*, p.5 Recuperado de: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf (Consultado el 20 de agosto de 2016).

^{xlii} Organización Mundial de la Salud (OMS). (2011). *Informe Mundial sobre discapacidad*, p.7 Recuperado de: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf (Consultado el 20 de agosto de 2016).

^{xliii} Tribunal Constitucional Colombiano (2011). “Concepto de discapacidad y el ambiente físico como una forma de integración social” (párr. 7). Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-553-11.htm> (Consultado el 22 de marzo del 2017).

^{xliv} Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2015). *Encuesta nacional de la dinámica demográfica (ENADID) 2014*. “Boletín de prensa 9”. Recuperado de:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_1.pdf

(Consultado el 30 de septiembre de 2016)

^{xlv} Organización de las Naciones Unidas. “Artículo 2. Definiciones”. *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Recuperado de:

<http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> (Consultado el 10 noviembre de 2016).

^{xlvi} Bermejo, Laura. (7 de octubre de 2016). Comunicación personal con Mariana Díaz Figueroa.

^{xlvii} Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Solicitud de acceso a la información. No. Solicitud: 0063400015216. En su respuesta, el Consejo señala: “CONADIS, no impulsa mecanismos de evaluación, capacitación o asesoría, CONADIS genera las políticas públicas para que las dependencias generen las acciones necesarias en concordancia con el Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. No se cuenta con mecanismo de quejas al respecto.”

^{xlviii} ONU-Hábitat. (s, f). *Reporte nacional de movilidad urbana en México*, p. 58. Recuperado de:

<http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf> (Consultado el 3 de octubre de 2016).

^{lix} El término diseño universal es definido en la CPCD como la creación de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, aclarando que lo anterior no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. Organización de las Naciones Unidas. “Artículo 2. Definiciones”. *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Recuperado de:

<http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> (Consultado el 10 noviembre de 2016).

ⁱ Gaceta Oficial del Distrito Federal. (2015) *Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal para el Periodo 2014-2018*, p. 9. Recuperado de:
<http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/documentos/pid.pdf> (Consultado el 10 noviembre de 2016).

ⁱⁱ La aplicación puede descargarse en el siguiente sitio web:

<http://www.esaccesibleapp.com/download/>

ⁱⁱⁱ Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de López Moreno, Patricia. “Irregularidades en los procesos y autorizaciones de las manifestaciones de construcción”. *Este País*, núm. 310 (febrero de 2017), pp. 16-24. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=23&t=irregularidades-en-los-procesos-y-autorizaciones-de-las-manifestaciones-de-construccion> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

^{liii} Renato Berrón Ruiz, Entrevista con el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, realizada por Patricia López Moreno (septiembre de 2016).

^{liiv} Renato Berrón Ruiz, Entrevista con el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, realizada por Patricia López Moreno (septiembre de 2016).

^{liv} Miguel Ángel Cancino Aguilar, Entrevista con el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, realizada por Patricia López Moreno (octubre de 2016).

^{lvi} Renato Berrón Ruiz, Entrevista con el director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, realizada por Patricia López Moreno (septiembre de 2016); Miguel Ángel Cancino Aguilar, Entrevista con el titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX, realizada por Patricia López Moreno (octubre de 2016); Héctor Ferreiro León, Entrevista con el catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Patricia López Moreno (septiembre de 2016); Francisco Javier Solares Alemán, Entrevista con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, realizada por Patricia López Moreno (septiembre de 2016).

^{lvii} Gene Towle, Entrevista con el socio director de Softec, empresa especializada en consultoría e investigación inmobiliaria en México, realizada por Patricia López Moreno (octubre de 2016).

^{lviii} Todos los datos que aparecen en este listado son extraídos del trabajo de García Velazco, Laura y Laorrabaquio Saad, Alejandra Georgina. “Salud pública en México ¿Un problema de impunidad?”. *Este País*, núm. 311 (marzo de 2017), pp. 22-32. También disponible en:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=27&t=salud-publica-en-mexico> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

^{lix} García Velasco, Laura y Laorrabaquio Saad, Alejandra Georgina. “Salud pública en México ¿Un problema de impunidad?”, p.9. Recuperado de:

<http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=27&t=salud-publica-en-mexico> (Consultado el 20 de marzo del 2017).

^{lx} Comisión Nacional de Arbitraje Médico. (2015). *Indicadores relevantes sobre la atención de controversias en salud (1996 - 2015)*. México: Autor. Recuperado de:

<https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/indicadores-relevantes-sobre-atencion-de-controversias-en-salud-1996-2015?idiom=es> (Consultado el 22 de octubre de 2016).

^{lxi} Comisión Nacional de Arbitraje Médico. (2015). *Informe estadístico sobre laudos concluidos 2012-2015*. México: Autor. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/165287/Informe_anual_sobre_laudos_concluidos_2012-2015.pdf (Consultado el 15 de noviembre de 2016).

^{lxii} Comisión Nacional de Arbitraje Médico. (2015). *Indicadores relevantes sobre la atención de controversias en salud (1996 - 2015)*. México: Autor. Recuperado de:

<https://www.gob.mx/conamed/acciones-y-programas/indicadores-relevantes-sobre-atencion-de-controversias-en-salud-1996-2015?idiom=es> (Consultado el 22 de octubre de 2016).

Comisión Nacional de Arbitraje Médico. (2015). *Informe estadístico sobre laudos concluidos 2012 - 2015*. México: Autor. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/165287/Informe_anual_sobre_laudos_concluidos_2012-2015.pdf (Consultado el 15 de noviembre de 2016).

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2016). *Memoria estadística 2015*. México: Autor. Recuperado de: <http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2015> (Consultado el 12 de enero de 2017).

^{lxiii} INEGI. (2015). *Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2015*. Recuperado de:

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2015/> (Consultado el 14 de octubre de 2016).

^{lxiv} Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Tesis Aislada 1a. CCLXVII/2016 (10a.). Décima Época. Noviembre de 2016.